

2.2 Una sanidad universal que permita vivir saludablemente

“No debemos dejar nunca que la mecanización del día a día, el protocolo, la administración, los turnos, etc, estén por encima de las personas. No en un lugar como éste donde la calidad humana es uno de los tratamientos más potentes que existen (...) Somos personas, no coches que entran en talleres y no tienen reparación” (José, sobre la necesidad de una atención humanitaria en el hospital en la queja 17/1558).

El derecho a la salud implica que las administraciones deben crear las **condiciones que permitan** a las personas **vivir** lo más saludablemente posible. Nos preocupa el reconocimiento del derecho a la **asistencia sanitaria** pública, las limitaciones a la **movilidad** de los pacientes, la atención **primaria y especializada**, las **urgencias y emergencias**, las **listas de espera**, las **campanas** preventivas y los protocolos frente a problemas de salud pública, la atención a la **salud mental**, la **prestación farmacéutica** o el **transporte sanitario**.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz vela por el respeto a los **derechos de los pacientes y usuarios** (consentimiento informado, seguridad, intimidad, acceso a la historia clínica, etc). Entre nuestras investigaciones en este ámbito, hemos publicado un Informe Especial sobre **La Muerte en Andalucía. Dignidad y Derechos**, con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que garanticen realmente el derecho de las personas a la dignidad en el proceso de muerte. En este trabajo detectamos algunas deficiencias, basadas en la desigualdad de los recursos de la ley entre el ámbito urbano y el rural, y en la insuficiente atención pediátrica en cuidados paliativos, principalmente.

Pero si hay un principio que sustente toda la política sanitaria, este debe ser sin duda la **universalidad**, basada en los principios de salud pública, equidad y solidaridad. La Institución siempre ha defendido la extensión del derecho a la asistencia sanitaria como un **derecho público subjetivo, personal y no contributivo**.

De ahí que estemos expectantes ante la vuelta a la normalidad que debe suponer el Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que desde el principio proclama su vocación de **“garantizar la universalidad de la asistencia”**, o lo que es lo mismo de “garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado español”. Esta norma explicita un reconocimiento general del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todas las personas con nacionalidad española y las **personas extranjeras** que tengan establecida su residencia en el territorio español. De igual manera, este decreto ley restablece las decisiones adoptadas sobre el copago farmacéutico, que esta Institución trató de aliviar desde su adopción en 2013 en colaboración con el Defensor del Pueblo estatal.

La mayor o menor intensidad con la que se cuestionan ciertos aspectos del sistema sanitario por parte de la ciudadanía nos ofrece un muestreo privilegiado de los puntos donde se concentra el descontento y por tanto de los escenarios donde esta Institución debería poner más énfasis para tratar de proponer medidas que, previa aceptación de la Administración sanitaria, pudieran contribuir a solventar los déficits en la sanidad.

Algunas de las materias sobre las que hemos recibido más demanda de actuación han sido la **atención primaria, especializada y de urgencias**. Estas quejas, si bien ya no tanto en atención primaria, se han ampliado no solo al tiempo de espera para la intervención quirúrgica, sino al tiempo previo para acceder a una consulta o a la realización de pruebas.

La gestión de las infraestructuras sanitarias también ha estado relacionado con estas denuncias, surgiendo un agravio comparativo entre provincias, comarcas y municipios que han motivado movilizaciones ciudadanas. La crisis económica postergó indefinidamente muchos de los proyectos, aunque en el Informe del año pasado quisimos ver reflejados los signos de la recuperación con el reinicio de las obras e incluso la finalización de algunos dispositivos, unos indicativos que permiten generar optimismo de cara a una mejor atención del derecho a la salud.